

POLÍTICA DE ESTADO CONTRA ETA

La situación creada por el comunicado de ETA debe recibir una política de Estado y no una política de ocurrencias y apresuramientos

LA advertencia de Mariano Rajoy de no «hacerle la campaña a Bildu» cobra enteros a medida que pasan los días y la izquierda proetarra acelera su movilización para aprovechar el comunicado de ETA de cese de la violencia. La izquierda abertzale tiene abiertos varios frentes en los que se juega buena parte de la capitalización del anuncio etarra. En el Tribunal Constitucional están los recursos contra la ilegalización de Sortu y contra la «doctrina Parot». Las elecciones generales del 20-N pueden darle un grupo parlamentario y la «acumulación de fuerzas» del nacionalismo pone al País Vasco ante un escenario político inédito a medio plazo, cuando se celebren las elecciones autonómicas de 2013. El Partido Nacionalista Vasco huele el cambio y ya ha pedido un adelanto electoral para que la izquierda abertzale entre en el Parlamento de Vitoria y recuperar así la hegemonía nacionalista perdida en 2009. Sin embargo, los movimientos más

significativos han sido realizados por el lendakari López, que ha iniciado una ronda de conversaciones con los partidos, que incluirá a Bildu, para escenificar iniciativa y liderazgo, aun a costa de legitimar a una formación política de la que el candidato socialista, Pérez Rubalcaba, dijo que «está en la estrategia de ETA».

Lo que haga el nacionalismo vasco está dentro de su lógica rentista, porque busca el aprovechamiento electoral del cese de la violencia de ETA, como antes lo buscaba cuando ETA mataba. Pero es una temeridad que los socialistas se embarquen en una agenda política de encuentros, declaraciones e iniciativas que sólo responde a la planificación diseñada por ETA, pero no al estado real de la cuestión que debería interesar al Gobierno vasco, que es la disolución y el desarme de la banda. La situación creada por el comunicado de ETA debe recibir una política de Estado y no una política de ocurrencias y apresuramientos. El lendakari debe ser consciente de que no será un gobierno socialista, sino uno del PP, el responsable futuro de las valoraciones y decisiones en torno al final de la violencia terrorista. La actitud de López obliga a recordar que al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero aún le queda un mes en plenitud de funciones. Mucho tiempo para tomar decisiones equivocadas y precipitadas, si el PSOE siente que es el que le queda para rehabilitarse ante la opinión pública. La certeza de que el 20-N producirá un cambio de gobierno debería traducirse en un compromiso público de Rodríguez Zapatero de no asumir pactos con ETA porque el probable presidente del nuevo Gobierno, Mariano Rajoy, ya ha dicho que con la banda nada es negociable.